

Chiapas y las relaciones entre civiles y militares
STEPHEN J. WAGER

En México, la celebración de año nuevo de 1994 sacudió al gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Durante la primera hora del nuevo año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) atacó y ocupó temporalmente cuatro ciudades de la región de Los Altos de Chiapas. Aunque los dirigentes políticos y militares de México negaron que este levantamiento los haya tomado por sorpresa, casi no hay duda de que la magnitud de la insurgencia sorprendió a estos dirigentes totalmente fuera de guardia.

Los arrogantes zapatistas pronto se encontraron implorando al pueblo de México que se uniera a este movimiento nacional en demanda de "empleo, tierras, vivienda, alimentos, servicios de salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz". Según su primera proclama, el objetivo del EZLN no era destruir al Estado; más bien pretendía "un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor de los movimientos populares y democráticos, con el fin de aislar y vencer las tendencias antidemocráticas que existen dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno, del estado y del resto de la sociedad". Aunque este levantamiento podría considerarse, con toda razón, como una concatenación de los problemas económicos, políticos y sociales endémicos de Chiapas, las acciones del EZLN afectaron al ejército mexicano de diversas maneras. En primer lugar, la reacción de las fuerzas armadas ante la agresión zapatista dio mayor ímpetu a los cambios en la relación legendaria entre la población civil y los militares. Más específicamente, los acontecimientos de Chiapas obligaron a estos últimos a reconocer y a participar más activamente en la transición de México hacia la democracia.

Desde el inicio del conflicto, el ejército mexicano ocupó un lugar secundario con relación al dirigente enmascarado del EZLN, subcomandante Marcos, quien obtuvo fama y popularidad inmediatas al proyectar la imagen de un Robin Hood moderno. A pesar del pasamontañas negro, la buena presencia física de Marcos se sumó a su carisma, lo que le permitió reunir a un gran número de simpatizantes con su causa. Este hecho causó gran consternación entre los dirigentes militares que calificaron a los zapatistas de traidores a la patria. Después de todo, los zapatistas declararon la guerra en contra del ejército mexicano, demandaron el desconocimiento del presidente de la nación y exigieron la creación un gobierno de transición z.

Podría decirse que el conflicto tuvo dos etapas. La primera fue una muy breve fase militar que concluyó el 12 de enero de 1994, cuando el expresidente Salinas declaró un cese al fuego unilateral. Para esas fechas, la presencia del ejército en la región había aumentado de 2,000 a más de 14,000 efectivos, número más que suficiente para acordonar el emplazamiento del EZLN en la selva lacandona. La segunda fase, de carácter político, inició después del cese de las hostilidades y se distinguió por la designación, por parte del gobierno, de un Comisionado para la Paz y la Reconciliación, y por la aprobación por el Congreso de una ley de amnistía. Esta última fase se extendió durante el resto de la administración de Salinas y hasta los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo.³

Las supuestas violaciones generalizadas a los derechos humanos que caracterizaron a la primera fase del conflicto convirtieron al ejército en un primer chivo expiatorio de la rebelión. Sin embargo, conforme los testimonios sobre la represión económica y política que prevalecía en la región se hicieron más evidentes, se exoneró parcialmente a los militares. Con el transcurso de la crisis se volvió cada vez más obvio que los funcionarios gubernamentales de alto nivel estaban conscientes de los problemas que enfrentaba Chiapas, y que subestimaron su gravedad y optaron por ignorarlos hasta pasadas las elecciones presidenciales de agosto de 1994.⁴

Desde el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco que lo marcó, el ejército mexicano no había vuelto a ser objeto de tantas críticas por parte del público. Tanto la prensa internacional como la local y un gran número de organizaciones no gubernamentales (ONGs) sometieron a las fuerzas armadas a severos ataques verbales y por escrito con relación a las supuestas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chiapas. En cierto sentido, este conflicto representa un parteaguas para el ejército. Desde el término de la revolución mexicana se había considerado que las fuerzas armadas eran intocables; no obstante, los acontecimientos de Chiapas parecen haber puesto fin de manera abrupta a esta situación mítica. Lo que cierto analista calificó como "relación irregular" entre los militares y el expresidente Salinas llegó a un punto crítico. En particular, los dirigentes militares empezaron a demostrar una seria preocupación por las dudas que surgieron sobre su orgullosa tradición de fiel servicio a la nación.

A pesar de haber recibido el apoyo valioso del ejército (los episodios de La Quina y Cananea constituyen buenos ejemplos de ello), que le permitió afianzar su autoridad después de una toma de posesión poco prometedor, en diversas ocasiones Salinas optó por permanecer desacostumbradamente silencioso en su defensa de las fuerzas armadas. Tradicionalmente, las contadas veces en que el ejército había sido objeto de escrutinio público, el presidente de la República siempre se había manifestado en favor de los militares. Cuando el expresidente decidió no hablar en defensa de los militares, el ejército sucumbió a una corriente de críticas que ha ido en aumento a partir de 1989.⁶

De manera más específica, en 1989 circularon en México y Estados Unidos numerosos informes en que se involucraba a un exsecretario de la Defensa Nacional en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico de alto nivel. Salinas decidió no desmentirlos y adoptó la misma actitud que mostró frente a los homicidios de agentes federales de narcóticos que se cometieron en 1991 en Veracruz. En 1993 algunas fuentes sugerían ya cierta intervención del ejército en el asesinato del cardenal Posadas, perpetrado en Guadalajara en mayo de ese mismo año por miembros de un cártel de drogas. En diciembre, la Comisión de la Verdad que investigó los acontecimientos que rodearon al movimiento estudiantil de 1968 abrió antiguas heridas, acusando al ejército de complicidad en la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Finalmente, un oficial de alto rango acusó al ejército de violar los derechos civiles de sus soldados y oficiales. Posteriormente, cierto número de periodistas decidieron dar a la historia un toque sensacionalista, cuando el oficial de referencia fue encarcelado por difamar de manera ostensible la reputación del ejército.⁷

Al aumentar las críticas después de la rebelión de Chiapas, el secretario de la Defensa Nacional, general Antonio Riviello Bazán decidió lanzar una campaña de relaciones públicas en defensa de su institución. Esta medida pareció ser un reconocimiento tácito, por parte de los militares, de que la transición democrática había cambiado el *modus operandi* al que estuvieron acostumbradas durante largo tiempo.⁸ Casi de la noche a la mañana los militares se hallaron dentro de un ambiente de gran competencia en el cual sus dirigentes ya no se sentían protegidos de las críticas públicas, sino que tenían que luchar con otros grupos de interés por obtener los escasos recursos y el apoyo gubernamental.⁹

La evolución reciente de las relaciones entre civiles y militares en México sugiere un distanciamiento entre las fuerzas armadas y el PRI. En el pasado, la Constitución ofreció una legitimación de la relación estrecha entre los militares y el PRI al exigir la lealtad de las fuerzas armadas al presidente de la República, quien tradicionalmente ha fungido como jefe informal del partido oficial. En vista de la existencia de una oposición política históricamente débil, esta relación rara vez se puso en tela de juicio. Sin embargo, durante la última década se registró el surgimiento repentino de partidos de oposición viables, lo que provocó que el ejército reconsiderara su estrecha alianza con el PRI, y que sus dirigentes declararan una neutralidad estricta durante la reciente sucesión presidencial.¹⁰

Aunque el candidato del PRI Ernesto Zedillo obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de agosto de 1994 por una mayoría definitiva, los dirigentes militares se prepararon para responder con mayor cautela a las órdenes de los dirigentes políticos, en particular cuando éstas pudieran tener un impacto negativo sobre la reputación de las fuerzas armadas. Por ejemplo, en septiembre un general declaró que el ejército no atacaría a los zapatistas a menos que el EZLN atacara primero. Afirmó, además, que si el presidente ordenaba al ejército que atacara, éste sólo obedecería si el Congreso hubiera aprobado la orden, o si el presidente hubiera decretado la suspensión de las garantías constitucionales. Este tipo de comentarios indica que el nuevo presidente habría tenido que hacer ciertas concesiones para volver a ganarse la confianza de los militares, que se disipó en cierta medida durante el gobierno de Salinas.¹¹

Mientras tanto, la situación militar de Chiapas parece haberse estancado, y ese estado de cosas favoreció más a los militares que a los zapatistas. La paralización política dio tiempo al ejército de entrenarse, de reorganizar algunas de sus unidades y de estrechar el cerco alrededor de la plaza rebelde. Según ciertos informes, tuvo incluso la oportunidad de reforzar sus inventarios con equipos nuevos tales como un mayor número de helicópteros y transportes blindados.¹² Este periodo de espera en realidad colocó al ejército en una posición más favorable para eliminar a la amenaza zapatista si se recurriera a este cuerpo en el futuro. Aparentemente, el resentimiento de algunos dirigentes del ejército continuó en ebullición debido a la negativa del expresidente Salinas de permitir a los militares que pusieran fin a la amenaza zapatista el mismo mes de enero de 1994, y en ansiosa espera de una oportunidad para probar su determinación.¹³

La transición pacífica al poder de Zedillo el 1 de diciembre de 1994 resultó muy breve. Aunque el nuevo secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre prometió la lealtad inquebrantable del ejército a su nuevo comandante en jefe, la economía no logró seguir el ejemplo de las fuerzas armadas. El 20 de diciembre se desató una crisis

de grandes dimensiones, cuando el nuevo presidente anunció la devaluación del peso y procedió a dejar que la moneda flotara.

Disgustado por haber tenido que tomar una medida tan drástica, Zedillo atribuyó gran parte de la culpa a los zapatistas que ordenaron una movilización de sus fuerzas en Chiapas el día anterior a la devaluación. Aunque el subcomandante Marcos negó toda responsabilidad, la economía mexicana sufrió un daño irreparable.¹⁴ La impaciencia creciente del nuevo presidente ante la falta de interés de los zapatistas por negociar una solución al conflicto asumió la forma de una amenaza velada durante el discurso que pronunció el 5 de febrero, día de la Constitución, cuando mencionó que una nueva estrategia tomaría el lugar de las negociaciones.¹⁵

El 9 de febrero de 1995 el presidente ofreció al ejército una oportunidad de terminar el trabajo que había dejado pendiente en enero de 1994. El comandante en jefe de las fuerzas armadas ordenó al ejército que penetrara en la selva lacandona para perseguir y arrestar a los dirigentes zapatistas.¹⁶ La operación militar resultante permitió comprobar lo que la mayoría de los oficiales de algo rango venían pensando desde tiempo atrás: que el enemigo era un "tigre de papel". Se demostró que el ejército era militarmente superior al EZLN desde todos los puntos de vista. El ejército invadió con rapidez los territorios rebeldes, ciñendo aún más el lazo alrededor del cuello de los zapatistas, casi sin toparse con resistencia. Posiblemente como respuesta a las presiones de los grupos de derechos humanos y del Congreso de Estados Unidos, el 14 de febrero Zedillo ordenó un alto repentino a la ofensiva sin que se hubiera logrado capturar a todos los dirigentes del EZLN.¹⁷

El triunfo del ejército dejó a la jerarquía del EZLN pocas opciones. Los dirigentes zapatistas podían negociar una solución pacífica o arriesgarse a ser eliminados. Aunque algunos dirigentes militares pueden sentirse molestos porque no se les dio la oportunidad de poner el toque final a la labor que iniciaron hace más de quince meses, el éxito de la operación revitalizó al ejército como institución. De hecho, ésta podría ser la mejor coyuntura para las fuerzas armadas. El EZLN quedó virtualmente impotente después de que el ejército "desenmascaró" a Marcos y debido a su incapacidad de responder a la ofensiva de las fuerzas armadas. En la actualidad, los zapatistas no cuentan con opciones militares viables. El cese de las hostilidades evitó al ejército ensuciar su imagen con acusaciones de violencia y represión y le permitió surgir de la refriega como vencedor. En vista de los acontecimientos de los últimos quince meses, la solución negociada sigue siendo el mejor curso de acción para el pueblo de Chiapas, el gobierno y los militares.

Al ayudar a resolver el problema político más grave del país, el ejército evidentemente se ganó la simpatía y la confianza de su nuevo comandante en jefe y demostró una vez más su lealtad hacia las instituciones del gobierno. La manifestación eventual de gratitud por parte de Zedillo por el apoyo que recibió del ejército podría ser un paso importante para mejorar las relaciones entre civiles y militares, que estuvieron bajo tensión durante los últimos años. No obstante, el apego del ejército a los mandatos de la Constitución va más allá de Chiapas, y los dirigentes militares deben empezar a pensar en un retorno a la normalidad.

La crisis de Chiapas ha obligado a las fuerzas armadas a desviar recursos destinados a sus tareas tradicionales. En particular, han desempeñado un papel primordial en la campaña

nacional antidrogas, mismo que debe conservar. Ahora que se establecieron las bases legales para las negociaciones con el EZLN, el ejército debe empezar a transferir los recursos tan necesarios a la lucha que el país libra contra las drogas. Los acontecimientos de los últimos meses podrían estar anticipando una función todavía más importante para los militares en el futuro. El aumento de la violencia política, en especial los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y la proliferación de secuestros de alto perfil podrían obligar al gobierno a depender más de los militares para lograr la seguridad política en el futuro inmediato. 18 Por otra parte, la reacción social desfavorable que se espera como resultado de las medidas recientes de austeridad económica que ha impuesto el gobierno podrían obligar a los militares a desempeñar un papel más activo en la salvaguarda de la paz pública.

1 Neil Harvey, *"Rebellion in Chiapas: Rural Reforms, Campesino Radicalism, and the Limits to Salinismo"*, in *Transformation of Rural México*, núm. 5 (La Jolla, California: Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California, San Diego, 1994).

2 Rail] Benítez Manaut, "El desafío de las guerrillas", *Nueva Sociedad*, núm. 130 (marzo-abril de 1994), pp. 24-26; Arturo Cano y Daniel Moreno, "La guerrilla que no existía", *Enfoque*, 9 de enero de 1994, pp. 18-20; *Epoca*, 10 de enero de 1994, pp. 8-15, y Andrew Reding, "Chiapas is México", *World Policy Journal*, vol. 11 (primavera de 1994), pp. 11-12. En marzo de 1994, el subcomandante Marcos participó en el programa popular estadounidense "60 Minutos", donde se le presentó como un Robin Hood moderno.

3 Benítez Manaut, pp. 28-30.

4 Entrevista con un funcionario mexicano que mantiene relaciones estrechas con el CISN, marzo de 1994; entrevista con un oficial militar de alto rango, marzo de 1994, y Raymundo Rivapalacio, "Entremés dominical", *El Financiero*, 23 de enero de 1994. Durante su entrevista para "60 Minutos" Marcos declaró que el gobierno había intentado ocultar los graves problemas que aquejan a Chiapas con objeto de asegurar la aprobación del TLC.

5 Carlos Ramírez, "Archivo político", *El Financiero*, 13 de febrero de 1994.

6 *Ibid.*

7 Roberto Zamarripa, "Censura Gobernación declaraciones de Patrocinio; luego rectifica y vuelve a censurar", *Proceso*, octubre de 1993; "Informe de la Comisión de la Verdad 68", *La Jornada*, 17 de diciembre de 1993; Alberto Aguirre e Ignacio Ramírez, "El general Riviello aceptó que en el 68 el ejército fue utilizado más allá de sus atribuciones", *Proceso*, 27 de diciembre de 1993, pp. 12-14; Manuel Robles y Rodrigo Vera, "Ocurrencias, contradicciones y mentiras, los recursos del gobierno para cerrar archivos del 68", *Proceso*, 3 de enero de 1994, pp. 6-9; Sergio Aguayo Quezada, "Los misterios del 68", *La Jornada*, 29 de diciembre de 1993; Roberto Zamarripa, "Autoritarismo, impunidad y ejercicio irracional del poder dentro del Ejército ponen en riesgo la seguridad nacional", *Proceso*, 13 de diciembre de 1993, pp. 20-24; Octavio Rodríguez Araujo, "El

caso Gallardo", *La Jornada*, 23, de diciembre de 1993 y Anthony De Palma, "A Mexican General in Prison, Says the Army Flouts Rights", *The New York Times*, 23 de diciembre de 1993.

8 "México cree en la lealtad, la practica y la reconoce como valor: Riviello Bazán", *La Jornada*, 10 de febrero de 1994; Carlos Ramírez, "Archivo político", *El Financiero*, 13 de febrero de 1994; Carlos Ramírez, "Indicador político", *El Financiero*, 18 de febrero de 1994, y Amparo Trejo y Julieta Medina, "Somos un ejército para lograr la paz", *Reforma*, 20 de febrero de 1994.

9 La mayoría de estas ideas se desarrollaron como resultado de las discusiones que se sostuvieron con dos académicos mexicanos durante una visita realizada a la ciudad de México en marzo de 1994.

10 Carlos Ramírez, "Indicador político", *El Financiero*, 18 de febrero de 1994.

11 Ignacio Rodríguez Reyna, "La hora de los generales", *El Financiero*, 27 de septiembre de 1994.

12 Véase, por ejemplo, Rossana Fuentes-Beráin, "Compra México armas de segunda", *Reforma*, 21 de diciembre de 1994, e Ignacio Rodríguez Reyna, "Rumbo al ejército del siglo XXI", *El Financiero*, 29 de noviembre de 1994. También se hicieron comentarios sobre el equipo nuevo durante una entrevista que se sostuvo en febrero de 1995 con un periodista mexicano.

13 Entrevistas con personas que mantienen vínculos estrechos con el ejército, marzo y diciembre de 1994.

14 Foreign Broadcast Information Service, *Daily Report-Latin America*, 3 de enero de 1995, pp. 22-23, y Anthony DePalma, "Peasants Block Roads in Troubled South Mexican State", *The New York Times*, 20 de diciembre de 1994.

15 Tim Golden, "México Leader Sends Force to Arrest Rebels in South", *The New York Times*, 10 de febrero de 1995.

16 *Ibid.*

17 Anthony DePalma, "Mexican Chief Orders Army to Halt Offensive on Rebels", *The New York Times*, 15 de febrero de 1995.

18 Un editorial que apareció en la edición del 6 de octubre de 1994 de *The New York Times* pone énfasis en el aumento de la tendencia a la violencia política.

Traducción: Lourdes González Varela

Departamento de Historia. Academia Militar de Estados Unidos, Westpoint, N.Y.

Los puntos de vista expresados por el autor no intentan reflejar la posición del Departamento de Defensa o del gobierno de Estados Unidos.

Tasas de crecimiento

